



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-015-018-2021-00062-01
Demandante:	Tomás Emilio Bolaño Mercado
Demandado:	Colpensiones E.I.C.E.
Asunto:	Apelación y Consulta de Sentencia
Procedencia:	Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín
M. Ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Pensión de vejez, Régimen de transición, Sumatoria de tiempos públicos y privados, Liquidación mesada pensional

Medellín, marzo catorce (14) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad pública demandada, respecto de la sentencia proferida el 06 de diciembre de 2022 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por Tomás Emilio Bolaño Mercado en contra de Colpensiones

E.I.C.E., conocido con el Radicado Único Nacional 05001-31-015-018-2021-00062-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor Tomás Emilio Bolaño Mercado, convocó a juicio a Colpensiones E.I.C.E., pretendiendo se declare que es beneficiario del régimen de transición, le resulta aplicable el Decreto 758 de 1990, y le asiste el derecho al reajuste de pensión de vejez con base el 90% del ingreso base de liquidación; en consecuencia, procura el reconocimiento y pago del mayor valor causado por concepto de reajuste pensional, con los intereses de mora, o en subsidio, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

En respaldo de tales pedimentos, expuso que nació el 18 de septiembre de 1950, que laboró al servicio del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid entre el 01 de marzo de 1982 y el 30 de junio de 1995, sin cotizaciones a ninguna caja o fondo de pensiones, que para el 01 de abril de 1994 contaba con 43 años de edad y había cotizado 848,56 semanas, acumulando más de 750 semanas cotizadas para 25 de julio de 2005, que fue pensionado por el riesgo de la vejez, mediante la Resolución 005164 del 05 de marzo de 2012, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990, prestación que fue incluida en nómina a través de la Resolución 016399 del 06 de junio de 2012, a partir del 01 de mayo del mismo año, en cuantía de \$5.759.860, liquidada sobre 1.084,43 semanas cotizadas, un IBL de \$7.384.436, y una tasa de reemplazo del 78%, sin tener en cuenta el tiempo laborado al servicio del sector público sin cotizaciones al ISS.

Finalmente informó que el 23 de marzo de 2018 solicitó el reajuste de la pensión de vejez con base en el promedio de los salarios devengados durante los últimos 10 años, y con una tasa de reemplazo del 90%, y que a través de la Resolución 198197 del 25 de julio de 2018 se dispuso el reajuste de la prestación, pero sin

tener en cuenta el tiempo laborado al servicio del sector público sin cotizaciones al ISS (doc.02, carp.01).

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderado legalmente constituido, Colpensiones E.I.C.E. dio respuesta al libelo introductorio, aceptando la fecha de nacimiento de actor, la densidad de semanas cotizadas para el 01 de abril de 1994 y para el 25 de julio de 2005, las condiciones bajo las que se le reconoció la pensión de vejez, y los términos en los que petitionó el reajuste de la prestación; sostuvo que bajo el Decreto 758 de 1990, la acumulación del tiempo público cotizado a otras cajas o fondos, con las semanas cotizadas al ISS, solo es viable cuando el status pensional se adquiere a partir del 16 de octubre de 2014, fecha de comunicación de la Sentencia SU-769 de 2014; y en oposición el éxito de las pretensiones excepcionó la inexistencia de la obligación; ausencia de causa para pedir; improcedencia de la indexación; improcedencia del pago de los intereses moratorios; prescripción; compensación indexada; buena fe e imposibilidad de condena en costas (doc.08, carp.01).

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo proferido el 06 de diciembre de 2022, declaró que bajo el amparo del Decreto 758 de 1990, al señor Tomás Emilio Bolaño Mercado le asiste el derecho al reajuste de la pensión de vejez, con una tasa de reemplazo del 90%; declaró parcialmente probada la excepción de prescripción; condenó a Colpensiones E.I.C.E. a pagar al demandante la suma de \$117.128.781 por concepto de reajuste pensional liquidado entre el 23 de marzo de 2015 y el 30 de noviembre de 2022, y la suma de \$10.081.418, por concepto de mesada pensional, a partir del 01 de diciembre de 2022; ordenó el pago indexado del reajuste pensional adeudado, y sobre el mismo autorizó descontar los aportes para el Sistema General de Salud; absolvió a Colpensiones E.I.C.E. de la pretensión referida al reconocimiento de los

intereses de mora; y condenó en costas a la entidad demandada (docs.19-20, carp.01).

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

El poderhabiente judicial de la parte actora impetró el recurso de alzada en procura de que se ordene el reconocimiento de los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en atención a que órgano jurisdiccional de cierre tiene por adoctrinado que los mismos tienen una naturaleza objetivamente indemnizatoria, y proceden tanto frente a la falta de pago total de la mesada, como por la falta de pago de alguno de sus saldos, o reajustes ordenados judicialmente (minuto 01:03:44, doc.19, carp.01).

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión, la apoderada de Colpensiones E.I.C.E., solicitó la revocatoria de la sentencia consultada, arguyendo que el actor causó el derecho a la pensión de vejez desde el 18 de septiembre de 2010, y la misma le fue reconocida a partir del 01 de mayo de 2012, esto es, previo a que la Corte Constitucional comunicara la sentencia SU-769 de 2014 en la que se estableció la procedencia de la acumulación de tiempos públicos y privados bajo el égida del Decreto 758 de 1990 (doc.03, carp.02).

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, y los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

De igual forma procede la consulta en favor de Colpensiones E.I.C.E., en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante*”.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN LA PRIMERA INSTANCIA

Los siguientes supuestos fácticos no son objeto de controversia:

- Que el señor Tomás Emilio Bolaño Mercado nació el 18 de septiembre de 1950 (págs.12-14, doc.02, carp.01), que laboró al servicio del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid entre el 01 de marzo de 1982 y el 30 de junio de 1995 (págs.31-67, doc.02, carp.01), y que cotizó 1.084,43 semanas al ISS, entre el 08 de junio de 1978 y el 30 de abril de 2012 (págs.15-30, doc.02, carp.01).
- Que el actor fue pensionado por el riesgo de la vejez, mediante la Resolución 5164 del 05 de marzo de 2012, bajo el amparo del Decreto 758 de 1990, por ser beneficiario del régimen de transición (págs.68-69, doc.02, carp.01), y a través de la Resolución 16399 del 06 de junio de 2012, se estableció la cuantía inicial de la prestación en suma de \$5.759.860, liquidada sobre 1.064 semanas cotizadas, un IBL de 7.384.436, y una tasa de reemplazo del 78% (págs.70-77, doc.02, carp.01).
- Que el 23 de marzo de 2018 el demandante solicitó el reajuste de la pensión de vejez “... *aplicando el 90% como tasa de reemplazo, sobre un IBL de \$7.683.568,16, el cual resulta de promediar los salarios cotizados durante los últimos 10 años*” (págs.72-77, doc.02, carp.01), y que mediante la Resolución 198197 del 25 de julio de 2018 se dispuso el reajuste de la prestación, a partir del 23 de marzo de 2015, con una mesada de \$6.467.846, liquidada con base en las semanas cotizadas al ISS, un IBL de \$8.292.110 y una tasa de reemplazo del 78% (págs.78-92, doc.02, carp.01).

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si la sentencia proferida en el proceso de la referencia se encuentra ajustada a derecho estableciendo para tal fin, si bajo el amparo del Decreto 758 de 1990, al demandante tiene al reajuste de la pensión de vejez, teniendo en cuenta la sumatoria de los tiempos públicos laborados sin cotizaciones al ISS y/o a otra caja o fondo de pensiones, y los tiempos efectivamente cotizados al Sistema General de Pensiones?

¿Si hay lugar al reconocimiento de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, i) es procedente reajustar la pensión de vejez reconocida en favor del demandante, con una tasa de reemplazo del 90%, teniendo en cuenta el tiempo laborado al servicio del sector público sin cotizaciones, conforme al Decreto 758 de 1990, por ser beneficiario del régimen de transición, y ii) el reconocimiento de los intereses previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 resulta improcedente tratándose del cambio de un criterio jurisprudencial, razones por las cuales la sentencia de primera instancia será CONFIRMADA y MODIFICADA únicamente para extender la condena en concreto por el concepto de retroactivo del reajuste pensional adeudado a la fecha del presente fallo.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

2.5.1.- De la sumatoria de tiempos públicos y privados

La Corte Constitucional compendió la línea jurisprudencial construida de tiempo atrás y según la cual es procedente la acumulación de cotizaciones y tiempo de servicios en el sector público, con el fin de reconocer una pensión de vejez, en aplicación del Decreto 758 de 1990 para los beneficiarios del régimen de transición, en los términos que a continuación se exponen:

“9.1. El cómputo de las semanas cotizadas es un aspecto que quedó consagrado en la Ley 100 de 1993 precisamente para dar solución a la desarticulación entre los diferentes regímenes que durante un tiempo hizo imposible acumular tiempos de servicio con diferentes empleadores, reduciendo notablemente la posibilidad de los trabajadores para acceder a la pensión de vejez.

De conformidad con los precedentes jurisprudenciales reseñados en la parte considerativa de esta sentencia, para efecto del reconocimiento de esta prestación es posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.

9.2. Por otro lado, según se decantó en esta providencia, por ser la postura que mejor se ajusta a la Constitución y a los principios de favorabilidad y pro homine, y que maximiza la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, tal acumulación es válida no solo para los casos en que fueron acreditadas 1000 semanas en cualquier tiempo, sino también para los eventos en los que se demostró haber reunido un total de 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida.

9.3. Finalmente, también es posible acumular el tiempo laborado en entidades públicas respecto de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo de previsión social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales. Lo anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede limitar el goce efectivo del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no haberse realizado las respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta que deba soportar el trabajador, más aún cuando era la entidad pública la que asumía dicha carga prestacional” (Sentencia SU-769 de 2014).

En la misma dirección la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo a su nueva integración, rectificó su postura respecto a la posibilidad de sumar tiempos públicos y privados, y en su lugar, propugnó la

viabilidad de la sumatoria de tiempos públicos y privados en aplicación del régimen de transición:

“De todo lo anterior, se concluye:

(i) El sistema de seguridad social, inspirado en el principio de universalidad y el trabajo como referente de construcción de la pensión, reconoce validez a todos los tiempos laborados, sin distinciones fundadas en la clase de empleador (público o privado) a la que se prestaron los servicios, la entidad de previsión a la que se realizaron los aportes o si los tiempos efectivamente laborados no fueron cotizados.

(ii) En tal dirección, el literal f) del artículo 13 refiere que para el reconocimiento de las pensiones del sistema se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el lapso laborado.

(iii) Los beneficiarios del régimen de transición, son afiliados del sistema general de seguridad social y, por consiguiente, salvo en lo que respecta a la edad, tiempo y monto de la pensión, las directrices, principios y reglas de la Ley 100 de 1993 les aplica en su integridad, lo que incluye la posibilidad de sumar todas las semanas laboradas en el sector público, sin importar si fueron o no cotizadas al ISS, hoy Colpensiones.

(iv) Esta regla de cardinal importancia la resaltó el legislador en el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al habilitar para los beneficiarios del régimen de transición, los tiempos públicos y privados, cotizados o no a entidades de previsión social o al ISS.

(v) Para darle viabilidad a esta posibilidad legal de integrar las semanas laboradas en el sector público sin cotización al ISS, la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios regulan extensamente todo un régimen financiación de las prestaciones a través de cuotas partes y títulos pensionales” (CSJ SL1984-2020, SL2557-2020, SL3538-2021, SL3484-2022).

Asimismo, la citada Corporación, extendió la procedencia de la referida acumulación de tiempos públicos y privados, para efectos de la reliquidación pensional en los siguientes términos:

“En tal dirección, así debe entenderse el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, por cuanto es inusual

que un párrafo no haga relación a la temática abordada por una norma, como en este caso serían las pensiones derivadas del régimen de transición, de modo tal que el cómputo previsto en este párrafo es predicable tanto para las prestaciones de Ley 100 de 1993 como las originadas por el beneficio de la transición de esta normatividad(...).

Conforme lo anterior, conforme al Acuerdo 049 de 1990 es viable acumular los tiempos de servicios públicos que cotizó la actora a otras cajas de previsión del sector público a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en dicho reglamento.

De modo que tal criterio jurisprudencial también es aplicable al asunto en controversia, esto es, a la reliquidación de la pensión de vejez de la demandante” (CSJ SL 2557-2020, SL 3801-2021, SL3484-2022).

Caso Concreto

En acatamiento del precedente jurisprudencial antes descrito, debe acogerse entonces la tesis de la pertinencia de la reliquidación de las pensiones de vejez, reconocidas bajo el régimen de transición, aplicando para ello, la sumatoria de tiempos públicos y privados, y siendo que en el *sub juice* no se discute que el señor Tomás Emilio Bolaño Mercado es beneficiario del régimen de transición, que le son aplicables las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, y que acredita un total de 1.714 semanas (12.003 días) laborados al sector público y privado, según lo asentado en la Resolución 198197 del 25 de julio de 2018 (págs.78-92, doc.01, carp.01), debe aplicársele como tasa de reemplazo el 90% del ingreso base de liquidación, conforme lo contemplado en el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, tal y como lo estableció la *a quo*.

Sobre el particular cumple precisar que en la mayoría de los casos que fueron objeto de pronunciamiento por el órgano jurisdiccional de cierre en las sentencias que conforman la línea jurisprudencial descrita en las líneas que anteceden los demandantes y/o afiliados acreditaron el status de pensionados, esto es, causaron el derecho a la pensión de vejez, con anterioridad al 16 de octubre de 2014, cuando se comunicó la *ratio decidendi* de la Sentencia SU-769 de 2014, sin que ello

fuera un óbice para negar el derecho a la sumatoria del tiempo público y privado, y ello es así porque los razonamientos expuestos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no se derivan exclusivamente de la doctrina que sobre la materia venía promulgando la Corte Constitucional, sino principalmente de un estudio concienzado e íntegro del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, que la condujo a la conclusión de que la interpretación restrictiva que se venía adoptando no tenía asidero en el campo jurídico que regía la materia.

Ahora bien, se advierte que entre la fecha en que para el actor se hizo efectivo el derecho al disfrute de la pensión de vejez, esto es, desde el 01 de mayo de 2012, según Resolución 5164 del 06 de junio de 2012 (págs.70-71, doc.02, carp.01), y hasta la fecha en que se solicitó el reajuste de la prestación, esto es, hasta el 23 de marzo de 2018 (págs.72-77, doc.02, carp.01), transcurrió con creces el término trienal de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, y por ello, solo habrá de reconocerse el mayor valor causado sobre las mesadas canceladas a partir del 23 de marzo de 2015, como acertadamente lo consideró la cognoscente de primera instancia, dado que entre la fecha de reclamación del derecho, 23 de marzo de 2018 y la fecha de presentación de la demanda, 10 de febrero de 2021 (pág.01, doc.02, carp.01), no transcurrió el término de prescripción antes descrito, esto es, el fenómeno extintivo se mantuvo interrumpido.

Y como el ingreso base de liquidación reconocido mediante la Resolución 198197 del 25 de julio de 2018, por valor de \$8.292.110 para el año 2015, no es objeto de discusión (págs.78-92, doc.01, carp.01), se colige que la mesada a reconocer a partir del 23 de marzo del mismo año asciende a la suma de \$7.462.899 ($\$8.292.110 \times 90\% = \$7.462.899$), tal y como lo ordenó la falladora de primer grado, y en tal medida, Colpensiones E.I.C.E. deberá reconocer y pagar en favor del demandante la suma de \$119.823.886, por concepto de retroactivo pensional liquidado hasta el 28 de febrero de 2023, debiéndose modificar en este aspecto la sentencia consultada, en el sentido de extender la condena en concreto, en los términos establecidos en el inciso 2º del artículo 283 del Código General del Proceso.

En igual sentido, cumple memorar que la mesada a reconocer a partir del 01 de marzo de 2023 asciende a la suma de \$11.404.102, tal y como se infiere de la liquidación que a continuación se anexa:

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	MESADA Rsln 1639 de 2012	MESADA Rsln 198197 de 2018	MESADA Dcto 758 de 1990	IPC	DIFERENCIA	MESADAS	FRACCIÓN	TOTAL
1-may-12	31-dic-12	\$ 5.759.860			2,44%	-\$ 5.759.860	13	0	PRESCRIPCIÓN
1-ene-14	31-dic-14	\$ 5.900.401			3,66%	\$ 0	13	0	PRESCRIPCIÓN
1-ene-15	22-mar-15	\$ 6.116.355			-	\$ 0	2	22	PRESCRIPCIÓN
23-mar-15	31-dic-15	\$ 6.116.355	\$ 6.467.846	\$ 7.462.899	6,77%	\$ 995.053	10	8	\$ 10.215.877
1-ene-16	19-mar-16	\$ 6.530.432	\$ 6.905.719	\$ 7.968.137	5,75%	\$ 1.062.418	13	0	\$ 13.811.435
1-ene-17	31-dic-17	\$ 6.905.932	\$ 7.302.798	\$ 8.426.305	4,09%	\$ 1.123.507	13	0	\$ 14.605.593
1-ene-17	31-dic-18	\$ 7.188.385	\$ 7.601.482	\$ 8.770.941	3,18%	\$ 1.169.459	13	0	\$ 15.202.961
1-sep-19	31-dic-19	\$ 7.416.976	\$ 7.843.210	\$ 9.049.857	3,80%	\$ 1.206.647	13	0	\$ 15.686.416
26-feb-20	31-dic-20	\$ 7.698.821	\$ 8.141.252	\$ 9.393.752	1,61%	\$ 1.252.500	13	0	\$ 16.282.499
1-ene-21	31-dic-21	\$ 7.822.772	\$ 8.272.326	\$ 9.544.991	5,62%	\$ 1.272.665	13	0	\$ 16.544.648
1-ene-22	31-dic-22	\$ 8.262.411	\$ 8.737.230	\$ 10.081.419	13,12%	\$ 1.344.189	13	0	\$ 17.474.457
1-ene-23	28-feb-23	\$ 9.346.440	\$ 9.883.555	\$ 11.404.102	-	\$ 1.520.547	2	0	\$ 3.041.093
TOTAL									\$ 119.823.886

Finalmente, se advierte que de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los aportes para el Sistema General de Salud se liquidan con base en el total de los ingresos que el afiliado hubiere recibido durante el periodo reportado, razón por la cual se confirmará la autorización deferida a Colpensiones E.I.C.E. para descontar del reajuste pensional dispensado los aportes para el Sistema de Seguridad Social en Salud.

2.5.2.- De los intereses moratorios y la indexación

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé:

“ARTICULO. 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1° de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”

Y por delineamiento jurisprudencial, los referidos intereses:

“... (i) tienen una naturaleza resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición, (ii) buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y (iii) existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando existan razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de nuevas reglas jurisprudenciales” (CSJ SL-1019 del 03-03-2021, Radicado 86195).

Sin embargo, el órgano jurisdiccional de cierre también ha reiterado que el reconocimiento de dichos intereses no opera de forma automática, sino que se deben estudiar las causas que llevaron a la entidad a negar el reconocimiento de la prestación, y en esa dirección destacó que no resultaba razonable imponer el pago de intereses moratorios cuando la conducta de la administradora estuvo guiada por el respeto a una normativa que de manera expresa regía el derecho en controversia, y en tal sentido:

“... no son viables cuando el reconocimiento de la prestación obedece a la creación o cambio del criterio jurisprudencial” (CSJ SL-787 del 06-11-2013, SL8644-2014, SL2941-2016, SL1547-2018, SL4599-2019, SL2414-2020, SL3481-2021).

Es claro entonces que los intereses moratorios deprecados no son procedentes, por cuanto en el *sub lite*, se presenta una de las situaciones que exoneran a la entidad de su reconocimiento, pues si bien no se encontraba en discusión que el actor era beneficiario del régimen de transición pensional, el derecho al reajuste pensional surge del cambio de posición jurisprudencial en torno a la posibilidad de sumar tiempos públicos y privados bajo los lineamientos del Decreto 758 de 1990. Procede si la indexación, la cual constituye un factor que compensa la pérdida del valor real de los dineros que en su oportunidad debieron pagarse, toda vez que, en países inflacionarios como el nuestro, la moneda pierde su valor adquisitivo, por lo que se confirmará la condena impuesta a Colpensiones E.I.C.E en este sentido.

Por todo lo anterior, deberá modificarse y confirmarse la sentencia de primera instancia.

Costas en esta instancia a cargo del demandante, por habersele resuelto el recurso de apelación de manera desfavorable. Se fijan como agencias en derecho en favor de la entidad demandada, la suma de \$1.160.000 que corresponde a un (1) SMLMV.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **MODIFICA** el numeral primero de la sentencia proferida el 06 de diciembre de 2022 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por Tomás Emilio Bolaño Mercado contra Colpensiones E.I.C.E., únicamente en el sentido de indicar que el reajuste pensional causado entre el 23 de marzo de 2015 y el 28 de febrero de 2023 asciende a la suma de \$119.823.886.

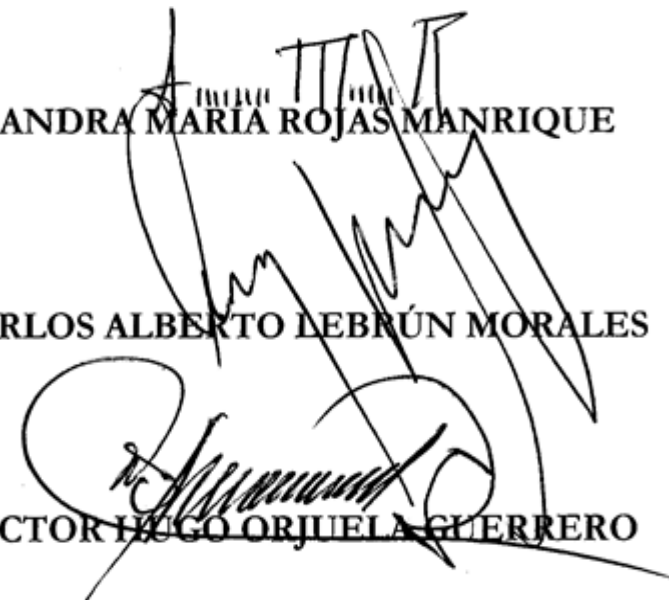
2.- Se **CONFIRMA** en todo lo demás la sentencia de fecha y origen conocidos.

3.- Costas en esta instancia a cargo de Tomás Emilio Bolaño Mercado y en favor de Colpensiones E.I.C.E.; se fijan agencias en derecho en la suma de \$1.160.000.

4.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO